

# REPORTE ASESORIA EXTERNA

---

AGOSTO 2022

---

SENADOR MATÍAS WALKER PRIETO

---

## APOYO

Intervención en Sala/Agosto 2022<sup>1</sup>

### **AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE EXAMEN PCR A MAYORES DE CATORCE AÑOS CON EL SOLO CONSENTIMIENTO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE**

**Boletín 15.097-1**

**Proyecto iniciado en moción iniciado de los Honorables Senadores señores Castro González, Chahuán y Macaya. Primer trámite constitucional**

El propósito de la iniciativa, de acuerdo a sus autores, es el de autorizar por ley que los mayores de 14 años requieran de autorización de los padres para la búsqueda activa de casos mediante la toma de PCR, bastando la sola voluntad del adolescente. Se continúa con ello en línea de las recomendaciones de la OMS y un reciente fallo de la Ilt. Corte de Apelaciones de Antofagasta que frente a la negativa de padres de inocular a hijo, se resolvió exigir su vacunación. Todo lo anterior, relevando las garantías y seguridad ante las características de transmisión del virus. Asimismo, se advierte que esta decisión es de carácter legal en virtud de la Ley 20.584, sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, que establece determinados procedimientos (exámenes médicos) deben ser autorizados por padres o representantes legales, estimando a su vez que las características de la toma de PCR resulta mínimamente invasivo y cuya pesquisa activa cumple con las condiciones de proteger a la comunidad escolar.

---

<sup>1</sup> Documento elaborado de acuerdo a la información disponible en primer y segundo trámite constitucional, según corresponda, informes de comisión, documentos acompañados en comisiones, entre otros, de acuerdo a información Cámara de Diputados y Senado de la República.

## **PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE FLAGRANCIA Y FACILITACIÓN DE DETENCIÓN DE OCUPANTES RESPECTO DE DELITO DE USURPACIÓN**

**Boletines 14.015-25 y 13.657-07, refundidos**

**Proyecto iniciado en mociones refundidas. Discusión en general. Primer trámite constitucional. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes en la forma que se indica**

### **La iniciativa se fundamenta en lo siguiente:**

- a. Derecho de propiedad. Consagrado constitucionalmente, sin embargo cuatrata de delito de usurpación, la penalidad resulta insuficiente: multa (desde 11 a 20 UTM), generándose así, una disparidad entre la protección general que se le otorga respecto de otros delitos que protegen el mismo bien jurídico y la sanción aparejada a este delito.
- b. En la práctica, el delito de ocupación de bienes se ha terminado cionvirtiendo en un modus operandi de organizaciones delictuales, que se encuentran lucrando ilícitamente mediante esta figura de la propiedad y/o inmuebles de teceros, vendiendo derechos ajenos, lo que se ha ido transformando en los llamados “loteos brujos”, respecto de los cuales los compradores no se transforman en consecuencia en dueños y/o propietarios.
- c. En consecuencia, al tratarse de actuaciones intencionadas, los compradores se transforman en víctimas de un delito de estafa por quien usurpa el inmueble o terreno, debiendo revisarse la figura penal y sanción que le apareja. Lo anterior, más aún considerando que el propietario legítimo cuenta con escasas herramientas legales para perseguir el delito. Inclusive, respecto de estos casos la figura de flagrancia tiene una limitante de sólo 12 horas desde su comisión, no entendiéndose como efecto permanente el sólo hecho de mantenerse usurpando el bien jurídico.

---

## Contenido del proyecto de ley:

- a. Aumenta la pena aplicable al autor del delito de ocupación ilegal de un inmueble con violencia, aumentándola, desde una multa que va de 11 a 20 UTM (de \$ 578.941 a \$1.052.620), a una pena de presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días).
- b. Dispone que se aplicará las penas establecidas respecto del delito de ocupación con violencia en las personas, al mayor de 18 años que para proceder a la ocupación de un terreno, se valiera del engaño, fuerza o coacción de un menor, incluso si no mediara violencia, o hubiese sido consentido por el menor.
- c. Sustituye la pena aplicable al delito de ocupación ilegal, cuando éste se efectuare sin el uso de la violencia en contra de las personas, reemplazando la multa actualmente contemplada por la pena principal de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un lapso entre 61 y 90 días.
- d. Establece la improcedencia de la sustitución de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por el pago de una multa, cuando aquella pena se ha impuesto con el carácter de principal. Asimismo, incorpora la sanción sustitutiva de "Prestación de servicios en beneficio de la comunidad" y regula su revocación: un día por cada 8 horas de servicios pendientes.
- e. Para efectos de la flagrancia, otorga a los delitos de ocupación ilegal, con o sin violencia en las personas, el carácter de permanente, desde que se dé inicio a su ejecución y mientras persista la ocupación. De este modo no importarán las horas transcurridas desde el inicio de la ocupación, encontrándose la policía estará facultada para detener a los ocupantes en cualquier momento.

---

## **PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y PAGO EFECTIVO DE LAS DEUDAS POR PENSIONES DE ALIMENTOS**

**Boletines Nos 14.946-07 y 14.926-07 refundidos**

**El proyecto de ley, iniciado en moción de las senadoras Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia Pascual y Yasna Provoste (Boletín N° 14.926-07); y en mensaje del Presidente de la República (Boletín N° 14.946-07). Primer trámite constitucional**

### **Idea Matriz:**

La iniciativa busca avanzar en el perfeccionamiento de medidas de apremio para asegurar que la obligación legal de pagar alimentos, mediante el establecimiento de un procedimiento y mecanismos efectivos para el cobro de las pensiones de alimentos adeudadas, facultando al tribunal competente para iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor en las cuentas bancarias, en las cuentas de ahorro previsional voluntario y en los instrumentos financieros o de inversión.

### **Fundamentos.**

En este sentido, se busca fortalecer la legislación vigente con el objeto de lograr hacer efectivo el pago de alimentos, relación jurídica que nace de la relación de filiación que existe entre los padres y madres con sus hijos y configura, además, un deber moral de responsabilidad y una obligación social, se cumpla, mediante el establecimiento de un procedimiento y mecanismos efectivos para el cobro de las pensiones de alimentos adeudadas, facultando al tribunal competente para iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor en las cuentas bancarias, en las cuentas de ahorro previsional voluntario y en los instrumentos financieros o de inversión, todo ello, teniendo presente que para el derecho internacional, el derecho a los alimentos constituye un derecho humano autónomo e individual que dice relación con el derecho de todo niño a un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

---

## **Antecedentes.**

- a. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 46% de las madres conforman hogares monoparentales, de cuyo universo sólo el 35% de estos contribuye a la manutención de los hijos en común. Asimismo, 9 de cada 10 demandas de alimentos son interpuestas por mujeres, lo que refleja el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias y constituye una forma de violencia.
- b. Normas internacionales. Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño. Dichas obligaciones establecen que los padres se encuentran obligados a proporcionar las condiciones de vida necesarias para el adecuado desarrollo del niño y niña. En este sentido, para el derecho internacional, el derecho a los alimentos constituye un derecho humano autónomo e individual que dice relación con el derecho de todo niño a un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
- c. Regulación ordenamiento jurídico. Los alimentos se encuentran regulados en el Código Civil y en la ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Asimismo, en el año 2021 se aprobó la ley N°21.389, para que quienes incumplan tal obligación sean objeto de diversas medidas de apremio para asegurar el cumplimiento como, por ejemplo, retenciones en caso de venta de inmuebles o vehículos.

## **Contenido del proyecto de ley.**

**Mediante el artículo 1, se modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, del modo que se señala a continuación:**

El artículo 1, relativo a la competencia para conocer de los juicios de alimentos, a fin de establecer que el tribunal deberá declarar inadmisibile la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso que la persona se encontrare con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que se presentaren antecedentes calificados para ello.

2.El inciso final del artículo 3, que permite al alimentario demandar a los abuelos cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las

---

necesidades del hijo, a fin de establecer como excepción el caso de que la única fuente de ingreso de los abuelos corresponda a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

3.El inciso segundo del artículo 6, relativo al contenido de la resolución que fija una pensión de alimentos, a fin de señalar que para especificar en ella las circunstancias que determinan la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, deberá considerarse, además de lo dispuesto en el Código Civil, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario.

4. El inciso primero del artículo 10, que faculta al juez para ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución, con el propósito de establecerlo en términos imperativos.

5. El artículo 16, que establece las medidas que debe adoptar el juez, a petición de parte, en caso de que existan una o más pensiones insolutas, con el propósito de incorporar entre ellas la orden de retención de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, aplicándose un procedimiento especial de cobro de deudas de pensiones de alimentos en el caso que no se tuviere conocimiento de las cuentas bancarias o de los instrumentos financieros o de inversión.

6. El artículo 19 bis, que establece el plazo de prescripción para las acciones ejecutivas de cobro por deudas de pensión alimenticia, a fin de cambiar la edad del alimentario a partir de la cual se comienza a computar, que actualmente es de 18 años, de modo que sea a los 21 años.

7. Se incorporan los artículos 19 quáter a 19 octies, con el propósito de establecer un procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos:

a) Búsqueda de patrimonio en cuentas bancarias, instrumentos financieros y/o de inversión, y en cuentas de ahorro previsional voluntario

b) Pago de la deuda con fondos de la cuenta de capitalización.

8. Se modifican los artículos 25 y 36, introducidos por la ley N° 21.839, los cuales entrarán en vigencia el 18 de noviembre de 2022.

En el caso del artículo 25, se posibilita que la inscripción en el Registro de Deudores sea revocada si la deuda de alimentos se salda mediante el pago que se realice en el procedimiento especial.

---

9. En el artículo 36, se dispone una inhabilidad para ser candidato a gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal respecto de la persona que tenga una inscripción vigente en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.

**Mediante el artículo 2, se modifican las siguientes normas del Código Civil:**

1. El inciso primero del artículo 323, a fin de establecer que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, dejando atrás el criterio vigente de subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.
2. El inciso final del artículo 324, con el objeto de impedir al padre o la madre ejercer el derecho a pedir alimentos al hijo en caso de que no haya pagado la pensión de alimentos judicialmente decretada.

**Mediante el artículo 3, se modifican las siguientes normas de la ley N° 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia:**

1. El artículo 1, a fin de exigir que se incorporen las órdenes de arresto vigentes libradas por los tribunales de justicia en el registro denominado Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que se indican, incorporando entre ellos el del deudor alimentario que haya sido declarado rebelde.
2. El artículo 2, que establece las menciones que deben contener las anotaciones que se realicen en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, para eliminar la expresión “de detención”, lo que se replica en los artículos 3, 4, 5, 6 y 11 de la misma ley. Se exige, además, que se especifique si la orden se libró en contra de la persona en su calidad de deudor de alimentos.

**Artículos transitorios.**

El artículo primero transitorio dispone la fecha de entrada en vigencia de la ley seis meses después de la completa entrada en vigencia de la ley N° 21.389, que regula el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.



---

El artículo segundo transitorio dispone que para el cómputo de las mensualidades necesarias para dar inicio al procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos sólo se considerarán las mensualidades devengadas y no pagadas a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin embargo, las mensualidades adeudadas con anterioridad serán consideradas en dicho procedimiento para el cálculo total de la deuda.

El artículo tercero transitorio establece que en el primer semestre del año 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá informar a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género y a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados acerca de la posibilidad de crear un fondo que se haga cargo de la deuda de los alimentantes que no tengan fondos suficientes en sus cuentas para pagar la pensión de alimentos.

Finalmente, el artículo cuarto transitorio dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, se indica que el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

---

## PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL PROCESO UNIFICADO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y CREA EL SISTEMA INTERCONECTADO PARA ESTOS EFECTOS.

Boletín 12392-25

Proyecto iniciado en moción el 17 de enero del 2019 por las Diputadas Karol Cariola, Erika Olivera, Joanna Pérez, Camila Rojas y Marisela Santibáñez; y por el Diputado Tomás Hirsch y los exdiputados Pablo Kast, Guillermo Teillier y Sebastián Álvarez.

### Idea Matriz.

El objetivo de esta iniciativa es establecer un marco legal integral de búsqueda de personas extraviadas y desaparecidas que permita superar las falencias existentes y así agilizar los tiempos de respuesta. Entre los aspectos principales, se encuentra la creación de un sistema informático que pueda centralizar, organizar e interoperar, a nivel nacional, la información relativa a personas desaparecidas; la obligatoriedad de la recepción de la denuncia y su comunicación inmediata al Ministerio Público, y la eliminación de la exigencia del transcurso de un tiempo mínimo desde las últimas noticias de la persona desaparecida, entre otros aspectos.

### Apoyo Intervención.

Este proyecto responde a un drama que experimentan las familias que cuentan con seres queridos extraviados, quienes, tras la denuncia, inician un proceso que se transforma en un desamparo cuando no hay mayores noticias. Recordemos que esta iniciativa legal se presentó en enero del año 2019 y fue tras la desaparición y posterior trágico asesinato de **una adolescente** que se reactivó su tramitación, con el objeto de fortalecer esta tarea de búsqueda y conocer el paradero. Así, mediante este proyecto se propone avanzar hacia una ley que permita regular cada uno de los pasos necesarios a ejecutar desde la denuncia por desaparición, señalándose que ésta “podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la

---

narración circunstanciada del hecho y todo antecedente que sea de utilidad para la búsqueda, sin que sea exigible el transcurso de un tiempo mínimo desde las últimas noticias de la persona desaparecida”. Asimismo, que ésta podrá “realizarse ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile o el Ministerio Público, aun cuando el denunciante y el desaparecido se encuentren en distintos lugares geográficos. Para los funcionarios es obligatorio recibir la denuncia y comunicar de inmediato al Ministerio Público, sin que sea necesario un tiempo mínimo de desaparición”. Al año 2020, unas 16.000 personas se encontraban desaparecidas, de ellas un 7% no reaparece y respecto de ellas y sus familiares es que se busca entregar una ley y protocolo que otorgue un trato digno, humanitario ante este dolor y para ello, agilizar los tiempos de respuesta y la forma en que se trabaja la desaparición de las personas, mediante un sistema interconectado de búsqueda, de comunicación constante, con técnicas especiales de investigación, las que permitirán de forma conjunta hacerse cargo de las actuales dificultades que hoy existen en esta materia, en especial ante la ausencia de coordinación y multiplicidad de datos, los que se buscan dejar atrás para dar paso a un trabajo más eficiente y eficaz, una respuesta consiente de las emociones humanas y del anhelo de cada personas de encontrar pronto y en lo posible, con vida a sus seres queridos extraviados. En relación al trabajo efectuado en el Senado, quisiera resaltar en especial el enfoque de género que se ha incorporado al texto y el respeto a la intimidad de cada persona. Sin duda las modificaciones se encuentran en línea con la legislación vigente, promoviendo como principio la perspectiva de género, disponiendo que “Se deberán realizar todas las diligencias necesarias posibles para el más pronto hallazgo de la mujer, niña o adolescente desaparecida, con un deber reforzado de diligencia”, reconociendo en esto un fenómeno cultural que se debe erradicar y que consiste en el mayor grado de violencia que se ejercer contra mujeres y que pueden ser víctimas de delitos violentos que pueden implicar su desaparición. Así, dispone la norma: “Se considerará que siempre constituirá un alto riesgo la desaparición de un niño, niña o adolescente, o de una persona de quien se tengan o aporten antecedentes que lleven a presumir que es víctima de violencia de género”. Con todo y considerando lo necesario que es contar prontamente con una ley de esta naturaleza, es que manifiesto mi voto a favor en este trámite legislativo, esperando con ello podamos contribuir como sociedad a entregar un sistema más consciente especialmente cuando se trata de procesos tan dolorosos que vive cada persona y donde el Estado debe actuar y amparar.